

# Boletín Oficial

## DE LA PROVINCIA DE ORENSE.

Se publica los martes, jueves y sábados de cada semana.—Se suscribe en la imprenta de D. Ceáreo Paz y Hermano, Fuente del Rey número 6 á 20 rs. trimestre para esta capital, y 30 para fuera franco de porte por trimestres adelantados.—Números sueltos á 12 cuartos el pliego.

### PARTE OFICIAL.

#### PRIMERA SECCION.

#### PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

S. M. la REINA nuestra Señora (Q. D. G.) y su augusta Real Familia continúan en esta Corte sin novedad en su importante salud.

#### MINISTERIO DE LA GOBERNACION.

##### Subsecretaria.—Negociado 3.º

Remitido á informe de la Sección de Estado y Gracia y Justicia del Consejo de Estado el expediente de autorización negada por el Gobernador de la provincia de Cádiz al Juez de Hacienda de la misma para procesar al Ayuntamiento y Junta pericial de Jerez de la Frontera en 1851, ha consultado lo siguiente:

Excmo. Sr.: Esta Sección ha examinado el expediente de autorización negada por el Gobernador de Cádiz al Juez de Hacienda de la misma para procesar al Ayuntamiento y Junta pericial de Jerez de la Frontera en 1851.

Resulta que en sesión celebrada por dicho Ayuntamiento en 15 de mayo de 1851 se leyó un oficio firmado por el Regidor D. José Fontóni, á nombre de la Junta pericial, instando lo otro que con la misma fecha había pasado al comisionado para la formación de la estadística en aquella ciudad D. Francisco Jimenez España, en el que al tratar de su comisión se le decía que á presencia de tres individuos de la misma había manifestado que tanto por sí como en nombre del Gobernador estaba facultado para el cese de las cartillas de gastos y proveyos y el resultado final de la estadística sería en adelante á gusto de aquella población si no se nombraba Diputado á Cortes á D. Manuel Bermudez de Castro; y que se aumentarían infinito los productos de la riqueza, se anularían las disposiciones que pudieran ser favorables al pueblo, y se aprobarían desde luego las exageradas cartillas formadas por el Sr. Sarlina en el caso de que dicho Sr. Bermudez de Castro fué reelegido.

Que habiéndose dado cuenta de este documento al Ayuntamiento, su Presidencia no permitió discusión ni deliberación

acerca de él, contra lo cual protestaron los Concejales, méenos uno, consignándose su protesta en el acta:

Que dada cuenta de lo ocurrido al Gobernador, oído el comisionado Espada, quien negó la imputación que se le hacía, y el Fiscal de Hacienda pública, quien opinó que la Junta pericial y Ayuntamiento de Jerez debían ser encausados por injuria ó calumnia y desacato, por decreto de 13 del mismo mes mandó pasar los antecedentes al Tribunal de la Subdelegación para que procediera á lo que hubiese lugar, lo que se verificó el día 15 siguiente:

Que el Ayuntamiento acordó elevar una exposición á S. M. contra la conducta observada por el Gobernador, á cuya exposición tampoco dió curso el Alcalde-Corregidor, y en su vista los Concejales la remitieron á S. M. como particulares, pasando una copia al Gobernador:

Que formado por este expediente gubernativo, oído el Fiscal de Hacienda en 29 de junio de 1851, mandó pasar este nuevo documento al Tribunal de la Subdelegación como antecedentes y para que procediese á lo que hubiera lugar:

Que después de varias actuaciones y entorpecimientos que no son del caso, el Juez, oído el Promotor fiscal, pidió autorización para proceder contra el Ayuntamiento y Junta pericial á consecuencia del oficio de 15 de mayo, cuya autorización fué negada por el Gobernador, conforme con el Consejo provincial:

Visto el Real decreto de 27 de marzo de 1850, dictando reglas para procesar á los Gobernadores de provincia, corporaciones y empleados dependientes de su Autoridad por hechos relativos al ejercicio de sus funciones administrativas:

Considerando que remitido por el Gobernador el expediente al Juez de Hacienda para que procediese á lo que hubiera lugar, debe entenderse que no podía ser esto sino contra el Ayuntamiento y Junta pericial de Jerez, indica los por el Fiscal de Hacienda en su informe: que por este hecho se anuló concedida la autorización, y una vez hecho esto no puede la Administración volver sus propios actos, ni por lo tanto pudo el Gobernador de Cádiz retirar la autorización que había concedido:

Opina la Sección puede servir: V. E. consultar á S. M. que es innecesaria la autorización que se ha solicitado, por considerarse ya concedida por el Gobernador.

Y habiéndose dignado S. M. la Reina (Q. D. G.) resolver de conformidad con lo consultado por la referida Sección, de Real orden lo comunico á V. E. para su inteligencia y efectos consiguientes. Dios

guarde á V. E. muchos años. Madrid 30 de diciembre de 1861.—José Posada Herrera.—Señor Ministro de Gracia y Justicia.

(Gaceta de 23 de enero último.)

#### MINISTERIO DE LA GOBERNACION.

##### Subsecretaria.—Negociado 3.º

Remitido á informe de la Sección de Estado y Gracia y Justicia del Consejo de Estado el expediente de autorización negada por V. S. al Juez de primera instancia de Torrelavega para procesar á D. Julian de Andino, Ingeniero de Montes que fué de esa provincia, ha consultado lo siguiente:

Excmo. Sr.: Esta Sección ha examinado el expediente en que el Gobernador de la provincia de Santander, ha negado al Juez de primera instancia de Torrelavega la autorización que solicitó para procesar á D. Julian de Andino, Ingeniero de Montes que fué de de aquella provincia.

Resulta: Que con motivo de causa criminal seguida contra dos vecinos del pueblo de San Mateo sobre daños causados en sus montes, la Audiencia de Burgos mandó sacar testimonio de dos oficios, suscrito el uno por el Ingeniero D. Julian Andino, y el otro por su sucesor D. Juan Crehuet, y también de una declaración prestada por el guarda mayor de montes D. Joaquín Cobo, á fin de que se pudiese en claro la contradicción que entre el contenido de dichos oficios y la declaración del guarda se advertía:

Que en efecto resultó que el Ingeniero D. Julian de Andino dirigió en 21 de marzo de 1860 al Alcalde de los Corrales un oficio dándole parte de haber sorprendido varios dañadores en los montes que iba recorriendo, añadiéndoles pormenores sobre la entidad de los daños, personas aprehendidas y clase de leñas cortadas; y en el curso de las actuaciones que el Alcalde de los Corrales y el Juez de Torrelavega practicaron, pasó oficio el Juez al Ingeniero de Montes de la provincia pidiéndole mas detalles sobre las leñas cortadas, su clasificación, dimensiones, tancion etc.; mas como en este tiempo había cesado en su cargo el Ingeniero Andino, el cual había reemplazado D. Juan Crehuet, contestó este al Juez que no podía satisfacer las preguntas que le había dirigido por falta de datos, y por haber hecho la aprehensión de los leñeros referidos el guarda mayor, sin proceder á su inculcación por ser píos y remos de insignificante valor:

Que examinado el guarda mayor Joaquín Cobo, declaró en abierta contradicción con lo afirmado por el Ingeniero Crehuet, pues dijo que no hizo mas que acompañar al Ingeniero Andino, y por lo tanto no podía determinar las dimensiones de las leñas ni los puntos en que se cortaron:

Que en virtud de tales datos pidió el Juzgado la autorización para proceder contra el Ingeniero D. Julian de Andino, suponiendo equivocadamente que la contradicción del guarda se refería al oficio suscrito por Andino y no al firmado por Crehuet su sucesor:

Que el Gobernador, antes de resolver, requirió á D. Julian de Andino para que expusiese sus descargos, y pidió también informe á la Sección de Fomento de la provincia:

Que resultó haber fallecido en aquellos días el Ingeniero Andino, contestando á su nombre un hermano político del mismo, pidiendo que continuase el expediente para que quedase en su lugar la buena fama del difunto, y se demostrase su inculpa-bilidad en el negocio que había motivado el proceso:

Que la Sección de Fomento manifestó que, según los antecedentes que en la oficina del ramo obraban, ni el difunto Andino había faltado á su deber en la denuncia de daños que hizo, ni tampoco el guarda, que había declarado en conformidad con lo expuesto por Andino, no siendo de extrañar que el Ingeniero Crehuet difiriese de lo declarado por el guarda, porque no tomó parte en la visita de inspección girada por su antecesor:

Que en su consecuencia el Gobernador, de acuerdo con el Consejo provincial, negó la autorización, fundándose en que no resultaba cargo alguno contra el difunto Andino, porque para que existiese la contradicción que el Juzgado suponía, sería necesario que los dos oficios de los Ingenieros hubiesen sido suscritos por una misma persona:

Considerando que no apareciendo discordancia entre el oficio suscrito por Don Julian de Andino y la declaración del guarda Joaquín Cobo, no puede hacerse cargo alguno al mencionado Ingeniero, ni aun por lo respectivo á la responsabilidad civil, única que en su caso pudiera hacerse efectiva, en razón á haber fallecido el interesado:

La Sección opina que debe confirmarse la negativa del Gobernador de Santander.

Y habiéndose dignado S. M. la Reina (Q. D. G.) resolver de conformidad con lo consultado por la referida Sección, de Real orden lo comunico á V. S. para su inteligencia y efectos consiguientes. Dios



guarda V. S. muchos años. Madrid 7 de enero de 1862.—Posada Herrera.—Señor Gobernador de la provincia de Santander.  
(Gaceta de 25 de enero último)

## MINISTERIO DE LA GOBERNACION.

### REAL DECRETO.

En el expediente y autos de competencia suscitada entre el Gobernador de la provincia de Santander y el juez de primera instancia de su capital, de los cuales resulta:

Que acordado por el Ayuntamiento de Santander, después de varios trámites, un proyecto de alineación y edificación de la casa núm. 23 de la calle de San Francisco de la misma ciudad, propia de D. Andrés Torres y otros interesados cerrando una calleja que existe entre esa casa y otra inmediata de la pertenencia de Doña Juana Gómez Barredo, y aprobado su acuerdo por el Gobernador de la provincia, sin perjuicio de los derechos de propiedad, al ejecutarse con autorización del Ayuntamiento la obra, acudió la expresada Doña Juana Gómez al juez de primera instancia, denunciando la porción de un interdicto, porque se arrimaban y apoyaban materiales en la pared Sur de su casa, y se la privaba del servicio que tiene en la calleja;

Y que admitida la denuncia, el Gobernador promovió en forma y sostuvo la presente competencia.

Visto el art. 81, párrafo cuarto y último de la ley del 9 de enero de 1845, en que se facultan los Ayuntamientos para deliberar sobre la formación y alineación de las calles, plazas y plazuelas, habiendo de ser ejecutorios los acuerdos del Ayuntamiento respecto a estos puntos, con aprobación del Jefe político (Sr. Gobernador de la provincia) o del Gobierno en su caso.

Vista la Real orden de 8 de mayo de 1859, que prohíbe los interdictos cuando tengan por objeto dejar sin efecto los acuerdos de los Ayuntamientos en materia de sus atribuciones legítimas.

Considerando:

1.º Que la denuncia de la nueva obra, en cuanto se refiere á que se apoyan materiales en la pared Sur de la casa de la demandante, no contraria de modo alguno lo acordado por el Ayuntamiento de Santander, que terminantemente establece que se construya una pared continua á la de la referida interesada para que sobre aquella granele la nueva edificación;

2.º Que no sucede lo mismo respecto al cerramiento de la calleja que ha acordado el Ayuntamiento, en el concepto de que aquel terreno no pertenece al dominio particular, y sobre el acuerdo del Ayuntamiento en este punto es improcedente el interdicto, según la Real orden de 8 de mayo de 1859;

Conformándose con lo consultado por el Consejo de Estado en plene,

Vengo en decidir esta competencia á favor de la Autoridad judicial en lo que se refiere á si la nueva edificación se apoya ó no en la pared de la demandante, y respecto al cerramiento de la calleja á favor de la Administración.

Dado en Palacio á 8 de enero de 1862.—Esta treceada de la Real mano.—El Ministro de la Gobernación, José de Posada Herrera.

(Gaceta del 26 de enero último)

## MINISTERIO DE LA GOBERNACION.

Subsecretaría.—Sección de orden público.—Negociado 3.º.—Quintas.—Circular.

El Sr. Ministro de la Gobernación dice con esta fecha al Gobernador de la provincia de Burgos lo que sigue:

Entorada la Reina (Q. D. G.) del expediente promovido por D. Eustaquio Ruiz en su calidad de que se requiera el acuerdo por el que el Consejo de esa provincia declaró soldado á Mariano Villanueva y Ruiz, sobrino del reclamante y quinto del reemplazo del año último por el cupo de esa capital, á pesar de haber expuesto oportunamente que debía ser excluido del alistamiento para el indicado reemplazo porque el padre de dicho mozo llevaba 16 años de residencia en la isla de Cuba;

Vista la regla 4.ª del art. 37, y el párrafo primero del 55 de la ley de quintas vigentes;

Considerando que habiéndose ausentado de la Península y de las islas Baleares el padre del expresado mozo, deb prescindiéndose enteramente del punto en que aquel hubiese fijado su residencia, y atenderse solo á la de la madre para todas las operaciones del regimiento;

Considerando que teniendo dicha madre su residencia habitual hace 16 años en esa capital, al alistamiento de la misma debe corresponder su hijo, en conformidad á lo dispuesto en la citada regla 4.ª del artículo 37, y párrafo primero del 55;

S. M., de conformidad con el dictamen de la Sección de Gobernación y Fomento del Consejo de Estado, se ha servido aprobar el mencionado acuerdo, por el que el Consejo de esa provincia declaró que el referido Mariano Villanueva estaba bien comprendido en el alistamiento y sorteo de esa capital, desestimando en su consecuencia el recurso elevado por D. Eustaquio Ruiz contra el expresado acuerdo. Al propio tiempo ha tenido á bien S. M. disponer que esta resolución se circule para que se tenga presente en casos análogos.

De Real orden, comunicada por el expresado Sr. Ministro lo traslado á V. S. para los efectos correspondientes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 15 de febrero de 1862.—El Subsecretario, Antonio Cánovas del Castillo.—Sr. Gobernador de la provincia de...

(Gaceta de 22 de febrero último)

## MINISTERIO DE LA GOBERNACION.

Subsecretaría.—Negociado 3.º

Remitido á informe de la Sección de Estado y Gracia y Justicia del Consejo de Estado el expediente de autorización negada por V. S. al Juez de primera instancia de Cazalla para procesar á Don Cefirino Ciebra, investigador de Propiedades y derechos del Estado, ha consultado lo siguiente:

Excmo. Sr.: Esta Sección ha examinado el expediente en que el Gobernador de la provincia de Sevilla ha negado al Juez de primera instancia de Cazalla la autorización que solicitó para procesar á Don Cefirino Ciebra, Investigador de Propiedades y Derechos del Estado.

Resulta que dicho funcionario contestando á una comunicación del Alcalde del Pedroso, en que este anunciaba á aquel que no le prestaría auxilio ni documentos algunos, le pasó oficio el Investigador haciéndole varias observaciones dirigidas á demostrarle la contradicción é iliquididad de su conducta y preguntando ó casante en su cargo, concluyendo además por decirle que se vería obligado, si no se cumplían las leyes, á retirarse de un puebl o donde no se administraba justicia por los encargados de ella;

Que al mes siguiente al en que pasó el Investigador la referida comunicación acudió al Alcalde Narciso Gallego, vecino del Pedroso, pidiendo por escrito para los usos que estimase convenientes certificación literal del oficio ó contestación de que se ha hecho mérito, á lo cual accedió el Alcalde, mandando al Secretario expedir la certificación solicitada; y previsto de

dicho documento el Narciso Gallego, le presentó al Juzgado de primera instancia de Cazalla, denunciando al Investigador por haber insultado á la Autoridad por medio del oficio que le había dirigido;

Que el Juzgado, de conformidad con el Promotor fiscal, pidió autorización para procesar al Investigador por considerarle reo de desacato, según el artículo 193 del Código penal;

Que el Gobernador, después de oír los descargos del interesado, quien atribuyó la denuncia á animosidad del demandante el cual, unido con el Alcalde hostilizaba al Investigador, porque ambos tenían motivos para temer las gestiones de éste en el ejercicio de su comisión investigadora, negó la autorización, de acuerdo con el Consejo provincial, fundándose en que no existe injuria por consecuencia de una comunicación oficial reservada, cuya publicidad se debió al acuerdo improcedente del Alcalde, mandando expedir certificación de ella á un particular completamente extraño á un asunto del servicio público; y si el Alcalde consideró ofendida su autoridad, debió el mismo acudir al Gobernador, el cual hubiera adoptado la determinación conveniente.

Visto el art. 39 del Código penal, que define el delito de injurias;

Considerando:

1.º Que las comunicaciones oficiales que median entre las Autoridades ó funcionarios públicos son por su naturaleza reservadas, y por lo tanto no ha lugar generalmente á presumir en ellas el delito de injuria, aunque su contenido se haga público indebidamente;

2.º Que las palabras más ó menos inconvenientes consignadas en el oficio dirigido por el Investigador al Alcalde, no constituyen el delito de injuria imputado al primero, porque habiendo sido estampadas en una comunicación oficial reservada, y en contestación á otra en que el Alcalde impugnaba las gestiones del Investigador negándole su auxilio, no puede decirse que éste tratase de desprestigiar ni ofender la autoridad de aquel, puesto que la publicidad de dichas frases procedió de la voluntad del mismo Alcalde en el hecho de haber accedido indebidamente á facilitar á un particular copia certificada de una comunicación u oficio de carácter reservado;

La Sección opina que debe confirmarse la negativa del Gobernador de Sevilla;

Y habiéndose, dicho S. M. la Reina (Q. D. G.) resolver de conformidad con lo consultado por la referida Sección, de Real orden lo comunico á V. S. para su inteligencia y efectos consiguientes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 6 de febrero de 1862.—Posada Herrera.—Sr. Gobernador de la provincia de Sevilla.

(Gaceta del 23 de febrero último)

## MINISTERIO DE HACIENDA.

Ilmo. Sr.: He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) del expediente instruido por esa Dirección en cumplimiento de la ley de 29 de abril de 1855, para llevar á efecto la revisión de la carga de Justicia de 323 rs. anuales que figura en el presupuesto de gastos de Estado al núm. 20, artículo 3.º, capítulo 51, Sección 4.ª, y percibe el Marqués de Espinardo, Conde de Sástago. En su consecuencia;

Visto el testimonio dado en 14 de mayo de 1850 por D. Agustín Cervantes, Escribano de número de la ciudad de Murcia, cotejado con su original respectivo con citación del Promotor fiscal de Hacienda, y literal de una escritura otorgada en dicha ciudad á 9 de noviembre de 1788 entre D. Antonio Vergara, como apoderado de la Marquesa de Espinardo de una parte, y de la otra Don José Monino, T. sorero de las obras de camino; de lo que resulta que éste resultó haberse ocupado para la cons-

trucción de la carretera de Murcia á Cartagena cierta porción de terreno perteneciente al mayorazgo que poseía la Marquesa de Espinardo, de quien es sucesor el Conde de Sástago, que según declaración de peritos componía 6,923 varas cuadradas, por valor en junto de 10,769 rs. 26 mrs., cuya cantidad quedó impuesta en aquella Tesorería como capital de censo al interés anual de 5 por 100 en favor del poseedor del expresado mayorazgo, é hipotecándose al pago del principal y réditos los productos de los portageos de la misma carretera;

Vista una comunicación de la Dirección general de Obras públicas, por la que consta que hasta fin de 1849 se vio satisfecho por aquel ramo esta obligación; que desde 1.º de enero de 1850 pasó á figurar en el presupuesto de cargas de Justicia, y que no ha sido redimido el censo de que trae origen;

Vista la ley de 29 de abril de 1855, mandando proceder al reconocimiento y clasificación de las cargas de Justicia, y el art. 9.º de la de presupuestos de 1853, determinando la forma en que debe verificarse;

Considerando que la escritura de 9 de noviembre de 1788 se otorgó por persona competente y con los requisitos legales establecidos;

Considerando que dicho documento conlleva una obligación contra el Estado por título oneroso que no ha sido extinguída;

S. M., conformándose con los dictámenes emitidos sobre el particular por la Sección de Hacienda del Consejo de Estado, esa Dirección y la Asesoría general de este Ministerio, ha tenido á bien confirmar el acuerdo de la Junta de revisión y reconocimiento de las cargas de Justicia, por el que se declara subsistente la de que se trata.

De Real orden lo digo á V. I. para su inteligencia y efectos correspondientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 8 de febrero de 1862.—Salaverria.—Señor Director general del Tesoro público.

## MINISTERIO DE FOMENTO.

Obras públicas.—Negociado 9.º

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto por esa Dirección, S. M. la Reina (Q. D. G.) ha tenido á bien autorizar á D. Francisco Pallarés Martínez para que, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero, practique investigaciones subterráneas con objeto de aumentar las aguas de un pequeño manantial desaprovechado que existe en el barranco de la vereda llamada de los Gatos, término de Alcedo, provincia de Murcia; de cuyas aguas podrá disponer á perpetuidad el concesionario, con arriego á lo prescrito en el art. 27 del Real decreto de 29 de abril de 1860.

De Real orden lo digo á V. I. para su inteligencia y efectos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 20 de febrero de 1862.—Vega de Armijo.—Sr. Director general de Obras públicas.

(Gaceta de 27 de febrero último.)

## SEGUNDA SECCIÓN.

### GOBIERNO DE LA PROVINCIA.

Don Francisco Javier Camuño, Gobernador civil de esta provincia. —Hago saber que en este Gobierno no se está instruyendo expediente sobre concesión de una pertenencia de la mina de estaño y otros metales, denominada Santa Marina, á



José Alonso, Serafín de la Iglesia, José Gil, Luis y Bernardino Yañez, vecinos de la parroquia de Escudeiros en el Ayuntamiento de Freás de Eiras. Esta mina se halla situada en terreno realengo ó comunal del lugar de San Juan de Escudeiros, paraje que llaman Seijosa. La designación que hacen los interesados es la siguiente:

Se tendrá por punto de partida el sitio de Seijosa, desde el se medirán en dirección norte 250 metros fijándose la primera estaca, desde esta en dirección este 200 metros colorándose la segunda, á sudeste 150 metros poniéndose la tercera y á sur 280 metros fijándose la cuarta.

Lo que se anuncia al público á los efectos prevenidos en los artículos 25 y 24 de la ley de fidejorio de 1859.

Orense 3 de marzo de 1862.—  
Francisco Javier Camuño.

#### CIRCULAR NUM. 87.

##### Sección de Fomento.—Minas.

En el expediente de concesión de la mina de estaño y otros metales denominada Santa Marina, sita en el distrito municipal de Freás de Eiras en terreno realengo ó comunal del lugar de San Juan de Escudeiros, instruido en esta Sección á instancia de José Alonso, Serafín de la Iglesia, José Gil, Luis y Bernardino Yañez, vecinos de la parroquia de Escudeiros en dicho Ayuntamiento, ha dictando el Sr. Gobernador la providencia siguiente:

Admitida sin perjuicio de lo que en este registro, publíquese en el Boletín oficial, pónganse edictos en la tabla de anuncios de este Gobierno de provincia, y remítase al Alcalde del término para que se fije en el sitio de costumbre, según dispone el art. 25 de la ley de 6 de julio de 1859, hágase saber á estos interesados, que en el preesito término de veinte días presenten en la Sección de Fomento de este Gobierno el plano del terreno que comprende este registro ó certificación del Alcalde del término, acreditando haber ejecutado la labor legal conforme previenen los artículos 21 y 28 de dicha ley, en la inteligencia que de no ejecutarlo, les parará perjuicio.

Y en virtud de lo dispuesto en el art. 40 del Reglamento de 5 de octubre de 1859 para la ejecución de la ley de minas, se les hace saber por medio de este periódico oficial para los efectos que la misma expresa.

Orense 3 de marzo de 1862.—  
El Cefe de la Sección de Fomento,  
Cárlos Raimonde y Puga.

#### SECCION DE FOMENTO.

#### CIRCULAR NUM. 88.

##### Montes.

Se reclaman de los Alcaldes noticias estadísticas sobre la existencia de maderas en sus distritos, aplicables á la construcción del material del arma de artillería.

A fin de poder suministrar los datos que se me reclaman por la Comandancia general Subinspección de artillería del distrito de Galicia, se hace preciso que los Sres. Alcaldes de esta provincia me faciliten á la mayor brevedad las noticias siguientes:

1.º Nombre y residencia de los principales almacenistas de maderas vecindados en su respectivo término municipal, clase y cantidad de maderas que tengan de existencias, comprendiendo las de nuestras colonias, estados de sequedad en que se encuentren y precios á que ordinariamente sean vendidas en almacén.

Y 2.º Qué maderas se producen en el distrito, aplicables á la construcción, nombres y residencia de los propietarios de montes y dehesas maderables de alguna consideración que se hallen en estado de ser explotados, y precio ordinario que tengan en venta los árboles según su estado y clase.

Orense 8 de marzo de 1862.—  
Francisco Javier Camuño.

#### CIRCULAR NUM. 89.

Real orden disponiendo que los Albeitares puedan levantar y volver á colocar las herraduras en los casos de enfermedad del casco, ó en el de operaciones verificadas en la región del pie.

Beneficencia y Sanidad.—Negociado 3.º

Por el Ministerio de la Gobernación del Reino con fecha 21 de diciembre último, se me dice de Real orden lo siguiente:

El Sr. Ministro de la Gobernación dice con esta fecha al Gobernador de la provincia de Lérida lo que sigue:

En el expediente promovido por D. José Roig sobre que se declare que los meros Albeitares están autorizados al verificar la curación de los cascos de los animales, para levantar las herraduras y colocar otras que sujeten los medicamentos aplicados, el Consejo de Sanidad con fecha 27 del mes último ha informado lo siguiente:—Excelentísimo Señor: En sesión de ayer aprobó este Consejo el dictamen de su sección primera que á continuación se inserta.

La sección ha examinado el expediente instruido á consecuencia de una instancia que el Albeitar Don José Roig dirigió al Excmo. Sr. Ministro de Fomento, con objeto de que se declarara el que los de su clase puedan levantar y volver á colocar las herraduras en los casos de enfermedades del casco ó en el de operaciones verificadas en la región del pie:

Considerando que los meros Albeitares están autorizados para curar y operar, como lo están los Albeitares, Herradores y Veterinarios:

Considerando que el pie padece enfermedades como otra cualquiera parte del cuerpo, y para reconocerle y poderlas tratar hay que levantar muchas veces la herradura y volver á colocar:

Considerando que en las operaciones del casco constituye la herradura una parte esencial del aparato, y que sería ridículo, á la par que poco científico, obligar al Albeitar á que interviniera un Herrador en el acto mecánico de quitar y poner la herradura cuando esto no es practicar el herrado:

Visto el científico y luminoso dictamen que la Junta de Catedráticos de la escuela profesional de Veterinaria de Madrid ha emitido ya, y que obra en el expediente, la sección cree puede el Consejo consultar al Gobierno la aprobación del mencionado dictamen en todas sus partes.

Y habiéndose dignado S. M. la Reina (q. D. g.) resolver de conformidad con el preinserto informe, de su Real orden lo comunico á V. S. para los efectos correspondientes.

De la de S. M. comunicada por el Sr. Ministro de la Gobernación, lo traslado á V. S. para los propios fines.

Lo que se inserta en el Boletín oficial para los efectos oportunos.

Orense 6 de marzo de 1862.—  
Francisco Javier Camuño.

#### CIRCULAR NUM. 90.

Real orden mandando se observe lo prevenido por la de 26 de enero de 1859 respecto á derechos por el enterramiento de los individuos que pertenezcan á la clase militar.

Beneficencia y Sanidad.—Negociado 3.º

El Ilmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de la Gobernación del Reino con fecha 8 de enero último, me dice de Real orden lo que sigue:

El Sr. Ministro de la Gobernación dice con fecha de hoy al Gobernador de esta provincia lo siguiente:

Dada cuenta á la Reina (q. D. g.) del oficio del Intendente de ejército de Castilla la nueva que V. E. trasladó con fecha 12 de diciembre último, queriéndose de que el ayuntamiento del Real sitio del Pardo, contraviniendo á lo resuelto por Real orden de 26 de enero de 1855, exige derechos de enterramiento por los individuos que de la clase militar fallecen en el Hospital del citado pueblo, S. M. ha tenido á bien mandar que se cumpla lo mandado en la citada disposición de 26 de enero de 1855.

De Real orden comunicada por el expresado Sr. Ministro, lo tra-

do á V. S. para su inteligencia y efectos correspondientes.

Lo que se inserta en este periódico oficial para los efectos oportunos.  
Orense 6 de marzo de 1862.—  
Francisco Javier Camuño.

#### CIRCULAR NUM. 91.

Se dan varias noticias relativas á la muerte de un hombre con objeto de conseguir la identificación de su cadáver.

El Sr. Juez de 1.ª instancia de Segovia con fecha 20 de febrero último, me dice lo que sigue:

En el juzgado de primera instancia de esta capital por la Escribanía de número de D. Antonio Leonor Menéndez, se están instruyendo diligencias sumarias en averiguación de la muerte de un hombre desconocido á quien se halló destrozado el día 8 del actual en el cuartel de Maja la Zarza, término del campo Azalvaro, jurisdicción del lugar de las Navas de San Antonio de este distrito, entre una mata pequeña de piorno, tendido de cubito lateral derecho la mitad del tronco de su cuerpo, único que conservaba, como asimismo la cabeza; el cual apesar de hallarse su rostro muy desfigurado y casi comido al parecer de los animales, representaba como unos 46 á 50 años de edad; sobre el pecho y espalda conservaba puesta como de ordinario una camisa de lienzo, un chaleco de jerga azul y una chaqueta de paño ó sayal burdo bastante vieja, y próximo al mismo se encontró igualmente unos calzones destrozados su mayor parte, un capote con mangas también de la misma clase que la chaqueta, idénticas dichas prendas á las que usan los naturales de las provincias de León y Galicia, y por lo que se presume debía ser algún pobre necesitado de alguna de éstas; en cuyas diligencias se ha acordado por providencia de esta día á solicitud del Promotor Fiscal, dirigir á V. S. la presente atenta comunicación por la cual se pone en su conocimiento el enunciado suceso, á fin de que por medio del Boletín oficial de esa provincia se dé la oportuna publicidad por si con los datos que van expresados pudiese identificarse el mencionado cadáver, ó que por lo menos la familia de que proceda pueda acaso comprender el mismo suceso, sirviéndose V. S. por último, manifestarme con la urgencia que le sea posible, el día en que se verifique la inserción que se encarga en el Boletín oficial de esa provincia y el número que aquel tenga, pues en ello se interesa la recta administración de justicia.

Lo que se inserta en este periódico oficial para los efectos que se expresan.  
Orense 6 de marzo de 1862.—  
Francisco Javier Camuño.



# ADMINISTRACION PRINCIPAL DE HACIENDA PÚBLICA DE ESTA PROVINCIA.

Por el Boletín oficial de la provincia de 16 de enero último, número 7, se interesaba á varios ayuntamientos de la misma, para que contribuyesen á solventarse de lo que eran en deber á la Hacienda por gastos ocasionados en trabajos estadísticos que tuvieron efecto el año de 1850. Y como apesar del tiempo transcurrido y de que procedieron ya á aquel aviso otros diferentes, están en descubierto aun de sus débitos los que á continuación se expresan, esta Administración lleva su deseo de no vejarles con apremios al extremo de concederles un nuevo plazo de diez dias para reintegrar al Tesoro, si bien advirtiéndoles que finalizado que sea, procederá ejecutivamente sin mas aviso.

Orense 5 de marzo de 1862.—  
Justo María tiemoso.

Nota de los Ayuntamientos deudores á quienes se contrae la precedente orden.

AYUNTAMIENTOS.	Cantidades anticipadas por el Tesoro. Reales vellón.
Allariz. . . . .	444
Barco. . . . .	275
Cinzo. . . . .	418
Rio. . . . .	240
Salamanca. . . . .	254
Villar de Barrio. . . . .	254
Viana. . . . .	456

## TERCERA SECCION.

### UNIVERSIDAD LITERARIA DE SANTIAGO.

Dirección general de Instrucción pública.—Anuncio.—Se halla vacante en los Institutos de segunda enseñanza de Avila, Teruel y Lérida la cátedra de Elementos de matemáticas, dotada con el sueldo anual de 8,000 reales, la cual ha de proveerse por oposición.

Los ejercicios se verificarán en Madrid en la forma prevenida en el capítulo 5.º del Reglamento de 5 de febrero de 1862.

Para ser admitido á la oposición, se necesita:

- 1.º Ser español.
- 2.º Tener 24 años de edad.
- 3.º Haber observado una conducta moral irreprochable.
- 4.º Ser Bachiller en ciencias ó Instituto de la expresada asignatura, con el título de Licenciado en facultad análoga.

Los aspirantes presentarán en esta Dirección general sus solicitudes documentadas en el término de un mes, á contar desde la publicación de este anuncio en la Gaceta.

Madrid 19 de febrero de 1862.—  
El Director general, Pedro Sabau.

Dirección general de Instrucción pública.—Anuncio.—Se hallan vacantes en los Institutos de segunda enseñanza de Valladolid y Zaragoza las cátedras de Lengua inglesa, dotadas con el sueldo anual de 8,000 reales, las cuales han de proveerse por oposición.

Los ejercicios se verificarán en Madrid en la forma prevenida en el capítulo 5.º del Reglamento de 5 de febrero de 1862.

Para ser admitido á la oposición, se necesita:

- 1.º Ser español.
- 2.º Tener 24 años de edad.
- 3.º Haber observado una conducta moral irreprochable.

Los aspirantes presentarán en esta Dirección general sus solicitudes documentadas en el término de un mes, á contar desde la publicación de este anuncio en la Gaceta.

Madrid 19 de febrero de 1862.—  
El Director general, Pedro Sabau.

Dirección general de Instrucción pública.—Anuncio.—Se hallan vacantes en los Institutos de segunda enseñanza de León, Cuenca y Jaén la cátedra de Dibujo lineal y topográfico, dotadas con el sueldo anual de 6,000 reales, las cuales han de proveerse por oposición.

Los ejercicios se verificarán en Madrid en la forma prevenida en el capítulo 5.º del Reglamento de 5 de febrero de 1862.

Para ser admitido á la oposición, se necesita:

- 1.º Ser español.
- 2.º Tener 24 años de edad.
- 3.º Haber observado una conducta moral irreprochable.

Los aspirantes presentarán en esta Dirección general sus solicitudes documentadas en el término de un mes, á contar desde la publicación de este anuncio en la Gaceta.

Madrid 19 de febrero de 1862.—  
El Director general, Pedro Sabau.

Dirección general de Instrucción pública.—Anuncio.—Se halla vacante en el Instituto de segunda enseñanza de Zaragoza la cátedra de Química industrial, dotada con el sueldo anual de 10,000 reales, la cual ha de proveerse por oposición.

Los ejercicios se verificarán en Madrid en la forma prevenida en el capítulo 5.º del Reglamento de 5 de febrero de 1862.

Para ser admitido á la oposición, se necesita:

- 1.º Ser español.
- 2.º Tener 24 años de edad.
- 3.º Haber observado una conducta moral irreprochable.

4.º Ser Licenciado en la facultad de Ciencias, químicas, Ingeniero industrial químico ó sustituto de la expresada asignatura, con título de Licenciado en facultad análoga.

Los aspirantes presentarán en esta Dirección general sus solicitudes documentadas en el término de un mes, á contar desde la publicación de este anuncio en la Gaceta.

Madrid 19 de febrero de 1862.—  
El Director general, Pedro Sabau.

Dirección general de Instrucción pública.—Anuncio.—Se hallan vacantes en los Institutos de segunda enseñanza de Tarragona, Almería y Ciudad Real la cátedra de Lengua francesa, dotadas con el sueldo anual de 6,000 reales, las cuales han de proveerse por oposición.

Los ejercicios se verificarán en Madrid en la forma prevenida en el capítulo 5.º del Reglamento de 5 de febrero de 1862.

Para ser admitido á la oposición, se necesita:

- 1.º Ser español.
- 2.º Tener 24 años de edad.
- 3.º Haber observado una conducta moral irreprochable.

Los aspirantes presentarán en esta Dirección general sus solicitudes documentadas en el término de un mes, á contar desde la publicación de este anuncio en la Gaceta.

Madrid 19 de febrero de 1862.—  
El Director general, Pedro Sabau.

Santiago 5 de marzo de 1862.— Es copia: el Rector, Juan José Vinas.

### Juzgado de 1.ª instancia de Ribadavia.

Don Froilan Prieto, juez de primera instancia de Ribadavia.—Hago notorio que en el pleito de menor cuantía seguido en este juzgado por los herederos de Manuel Dominguez y su mujer Teresa Varela, vecinos de la Araya contra Juan Campo y Francisco Alvarez de la propia vecindad sobre pago de reales, se pronunció esta sentencia:

En la villa de Ribadavia á 13 de marzo de 1862. En el pleito de menor cuantía que en este juzgado pende y se litiga entre partes Gines y Gaudencio Dominguez, Rosa Bernabé, Mariana Guntin, Maria Bernabé, Josefa Dolores y Ciprian Armada, Manuella y Benito Francisco, Bernabé Gregorio, José Varela, Victorio y Francisco Carpiñero, herederos de Manuel Dominguez y su mujer Teresa Varela, vecinos de San Salvador de la Araya en este partido, Don José Alvarez Fernandez su procurador, de la una y de la otra Juan Campo y Francisco Alvarez, de la misma vecindad, los cuales no comparecieron y se hallan en rebeldía sobre pago de 720 rs.

Resultando que el citado Gines Dominguez y consorcios en 24 de noviembre de 1860, propusieron contra Juan Campo como principal deudor y Francisco Alvarez en calidad de fiador, acción y demanda personal de menor cuantía por la cantidad de 720 rs. exponiendo como hechos que el Juan Campo ten concepto de principal y como fiador, el Francisco Alvarez, tomaron á préstamo del Manuel Dominguez en dinero efectivo vino y una novilla, la cantidad de los 720 rs. que el Campo pagó en esta cantidad apesar de las reclamaciones que se le hicieron y llamados á conciliación, solo confesó haber recibido una novilla valuada en 140 rs. que dijo pagara en diferentes partidas, y que habiendo fallecido el Manuel Dominguez y su mujer sin herederos forzosos recayó su herencia en los colaterales mas próximos que son los demandantes, quienes por esta razon representan el derecho de aquellos. Y concluyeron á que se declarase que el Juan Campo como principal deudor y el Francisco Alvarez en calidad de fiador, adeudan á los demandantes como herederos de Manuel Dominguez y su mujer Teresa Varela la cantidad de los 720 rs. y en su consecuencia condenarlos á que el primero se les pague dentro de tercer dia con las costas, y al segundo para el caso de que hecha escusión rigurosa de bienes, resulte insolvente.

Resultando que habiéndose entregado las copias de la demanda y documentos en persona á los demandados no comparecieron, por lo cual se les acusó la rebeldía y mandó seguir adelante el curso del pleito.

Resultando que recibido este á prueba los demandantes pusieron y se estimó que los demandados declarasen bajo juramento, indecisorio á tenor de las preguntas de su interrogatorio. El Juan Campo fue citado en persona primera y segunda vez, mas no compareció; se le declaró tenido por confeso y habiéndose notificado esta providencia tambien en persona nada dedujo contra ella; y el Francisco Alvarez, evadió la declaración exigida.

Considerando que habiéndose declarado confeso al Juan Campo por todos los capítulos del interrogatorio que presentó el procurador de los demandantes en 30 de setiembre del año último, y hallándose comprendidos en él los hechos de la demanda así como que liquidadas cuentas entre el Manuel Dominguez en el año de 1856 en la casa de Francisco Alvarez, resultó alcanzado el Campo en la cantidad de los 720 rs. que se obligó á satisfacer al Dominguez en documento simple otorgado en el acto; se halla probada en forma la deuda cuantía al mismo Campo.

Considerando que el Francisco Alvarez

negó todas las preguntas del interrogatorio; los demandantes no dieron prueba alguna, y la declaración de confeso relativa al Juan Campo no prueba contra el Francisco Alvarez;

Fallo: Que debo de declarar y declaro que Juan Campo, como principal deudor, debe ó adeuda á los demandantes, como herederos de Manuel Dominguez y Teresa Varela, la cantidad de los 720 reales; y en su consecuencia, lo condeno á que se les pague dentro de tercer dia con las costas. Y absolvo al Francisco Alvarez de la demanda que contra él se propuso en 24 de noviembre de 1860. Esta sentencia, ademas de notificarse en los estrados del juzgado y de hacerse notoria por medio de edictos en la forma prevenida en el artículo 1185 de la ley de Enjuiciamiento civil, se publicará en el Boletín oficial de esta provincia, y por ella, definitivamente juzgando en primera instancia, así lo pronuncio, mando y firmo.—Froilan Prieto. Dada y publicada: en la antecedente sentencia por el Lic. D. Froilan Prieto, juez de primera instancia de este partido, oído el dictamen integralmente en la audiencia pública del día de hoy, á presencia de D. Racion Maria Dieguez, D. Primo Gonzalez y Antonio Carrera, de esta población, y otros; de todo lo que yo escribo de número original doy fe. Ribadavia marzo 5 de 1862.—Felipe Varela.

Y para que la insercion prevenida en el Boletín oficial tenga efecto, se expide el presente. Dado en la villa de Ribadavia á 5 de marzo de 1862.—Froilan Prieto.—Felipe Varela.

### Ayuntamiento de Carballeda de Avia.

Este Ayuntamiento, enclavado en el partido de Ribadavia, publica la vacante de una plaza de Médico-cirujano para la asistencia en sus dolencias de 176 familias pobres que por ahora resulta haber en el radio del mismo, dotada con la cantidad de 3,300 rs. bajo las condiciones que estarán de manifiesto en la secretaría del propio Ayuntamiento; y en ella los que aspiren á dicha plaza, presentarán sus solicitudes documentadas en los treinta dias siguientes al de la insercion de este anuncio en la Gaceta de Madrid.

Carballeda marzo 6 de 1862.—El Alcalde, Pedro Gonzalez y Perez.

Idem de Piñor.

Esta corporacion acordó crear una plaza de Médico-cirujano para la asistencia de las familias pobres de esta alcaidia que ascienden al número de 300, con la dotacion de 3,000 rs. anuales, cobrados por trimestres de los fondos municipales.

En su consecuencia, los aspirantes á dicha plaza presentarán sus solicitudes en el término de treinta dias, contados desde la insercion de este anuncio en la Gaceta de Madrid, pudiendo enterarse de las condiciones para servir aquella en la secretaría del ayuntamiento en cuyo local estarán de manifiesto.

Piñor marzo 7 de 1862.—E. A. P., Cándido Riccio de Aguilar.—P. A. D. A., Agustín Rodriguez, Srio.